

# TRIBUNA DE LA VANGUARDIA

## CAMBIO DE ACTITUDES

# LA ALTERNATIVA FRANCESA

DENTRO de pocas semanas tendrán lugar las elecciones generales en Francia para elegir nuevo Parlamento. Será este comicio un «test» de extraordinario interés para el porvenir de la V República y para la orientación del futuro europeo. Se presentan a la lucha dos grandes bloques contrapuestos: la mayoría gaullista y la alianza de los socialistas. Hay un tercer grupo que se titula a sí mismo «reformador». Lo integran fundamentalmente el radical-socialismo que inspira ahora el inquieto dinamismo de Servan-Schreiber, y el centro demócrata que dirige Lecanuet.

Los muestreos y sondajes que con cierta periodicidad se verifican desde hace unas semanas ofrecen un porcentaje de opiniones que da un 47 a 48 por ciento a favor del bloque social-comunista, un 38 por ciento a favor de la mayoría gubernamental y un 14 por ciento para los reformadores. Francia es un país que electoralmente se basa en el sistema del «ballotage» y de la segunda vuelta. Además tiene la distribución en distritos, lo cual configura desigualmente la proporción entre los votos y el número de actas. Por eso, un porcentaje de muestreo no quiere decir ni mucho menos que el grupo en cuestión más favorecido vaya a obtener la victoria. Es, sin embargo, una evidente indicación de tendencia. La mayoría gaullista ha manifestado una notable inquietud cerrando sus filas. Pero el Gobierno y el presidente de la República han ido más allá, exponiendo su interpretación de la Constitución en caso de que los del bloque izquierdista obtuvieran, en efecto, la mayoría numérica de los puestos de la Asamblea. «El presidente no está obligado a nombrar un jefe de Gobierno que responda a un tal resultado electoral», han dicho Messmer y Pompidou. La Ley fundamental expresa bien claramente —dicen ambos— que el jefe de Gobierno debe de tener la confianza del jefe del Estado, aunque no tenga la del Parlamento.

¿Es ésta realmente la hermenéutica correcta del texto constitucional francés? La polémica

se ha iniciado ya por unos y por otros y hay argumentos que parecen válidos en ambas partes. «Al elegirse el presidente de la República por siete años por sufragio universal directo de toda la nación, ya se obtiene el referendo y consenso populares para todo el período», sostienen los unos. «El artículo 3 del mismo texto, declara que la soberanía nacional tiene su origen en el pueblo», contestan los otros. «Si el presidente va a hacer caso omiso del resultado de las elecciones generales ¿para qué celebrarlo?», añaden. «Entraríamos en una etapa constitucional puramente presidencialista con ribetes autoritarios.» Pero los gaullistas replican que ese fue el motivo esencial que inclinó el ánimo del general de Gaulle a establecer la elección presidencial por elección popular: hacerla independiente de los vaivenes parlamentarios.

El origen de toda esa polémica es la presencia del partido comunista en la alianza de la izquierda. Hasta ahora, salvo en las consultas del «referéndum» y en la elección presidencial de diciembre de 1965 —en que Mitterrand obligó a de Gaulle a ir a una segunda vuelta— el comunismo jugaba en solitario a efectuar el recuento de sus votos propios. Por primera vez desde hace más de veinte años, el partido aspira ahora a gobernar con un programa establecido de acuerdo con el socialismo. Sus puntos son relativamente moderados y se refieren a los sectores económicos, educativos, sanitarios y sociales, primordialmente. El partido comunista abandona su táctica revolucionaria —no su doctrina— y acepta un propósito político de alcance limitado en caso de lograr la victoria electoral. Se puede decir que por primera vez también, desde 1950, la opinión pública se plantea asimismo esa posibilidad como un hecho real, no abstracto, ni utópico.

¿Cabe añadir que al Partido Comunista francés se le otorgue asimismo una «credibilidad democrática» después de las cautelosas y pru-

dentas afirmaciones de Georges Marchais sobre el particular? La respuesta es dudosa. El «dossier» del comunismo soviético no es ciertamente ejemplar en la materia. La calificación de «democráticos» que otorga a los regimenes de la Europa del Este y el último episodio de Praga, han sido evidentemente malos argumentos para esa fiabilidad. En el fondo del problema está la existencia de una posibilidad de turno abierto de Poder para los grupos de la oposición por la vía de la legalidad, en cuanto el sufragio de los más, les vuelva a favorecer en los comicios. ¿Qué duda cabe que es precisamente esa característica la que distingue esencialmente a los regimenes totalitarios de los democráticos? Y volviendo al caso de Francia, ¿qué garantías existen de que una vez instalados en el Gobierno, se hallen dispuestos los comunistas a aceptar su salida del mismo ante un veredicto posterior desfavorable de las urnas?

Tales son los dos extremos entre los que se plantea la alternativa francesa del próximo mes de marzo. Los «reformadores» no aceptan esa disyuntiva y sostienen que el entero esquema es erróneo y que lo necesario y urgente es una reforma general de las estructuras del país que el gaullismo no es capaz de promover por su inercia inmovilista y el bloque socialista tampoco, por su rigidez dogmática. Pero el pronóstico electoral más favorable no concede a los reformistas sino unas pocas docenas de actas en el mejor de los casos.

Mirando más al interior de la alternativa francesa, se adivina en ella una perspectiva que procede del contexto general del mundo europeo y aun de la política universal. Me refiero al general relajamiento de las tensiones que ha producido la liquidación de la guerra fría. Al deshielo de los bloques rígidos y al clima de negociación y compromiso que se observa entre los grandes —Helsinki, Viena, Ginebra son otros

tantos puntos de diálogo concreto— corresponden a una nueva actitud de las fuerzas políticas. Los dos grandes partidos comunistas del Occidente —el italiano y el francés— se aprestan a tomar posiciones en la legalidad republicana respectiva. Su envite ya no es la revolución violenta, ni la ruptura del sistema establecido, sino el logro del poder —compartido— por la vía pacífica y legal aceptando para ello la vigencia de una parte del «status». El ejemplo de Marchais aceptando la política del Mercado Común y de la C. E. E. dentro de su programa es una prueba evidente de ese nuevo rumbo.

Nada de esto era imaginable hace unos pocos años. Como era inverosímil la «Ostpolitik» de Brandt; el reconocimiento de las dos Alemanias; los viajes de Nixon a Pekín y Moscú; la política independiente del Japón y los gestos altaneros antiamericanos de Nueva Zelanda y de Australia. Hay un profundo cambio de actitudes en la entera política internacional.

No creo que la alianza marxista obtenga el triunfo mayoritario en la Asamblea francesa, pero sí sospecho, en cambio, que el avance de sus fuerzas será espectacular. Tan importante que se convertirá en una fuerte oposición política que hasta ahora no existía, obligando a la mayoría gaullista al abandono de actitudes excesivamente categóricas y absolutas, y a la necesidad de compartir con ella muchas de sus decisiones internas y exteriores. En ese nuevo planteamiento habrá muchos factores contradictorios, no fáciles de resolver, pero puede predecirse que el posgaullismo, es decir, la inercia del gaullismo vivo habrá terminado, con ello, su última etapa histórica iniciada en 1958.

José María DE AREILZA

## MERCADOS

# LAS NACIONES Y SU EMBROLLO

HACE escasamente unas semanas, el jefe de la misión de observadores que la República Democrática Alemana ha enviado —por primera vez— a la O.N.U., un «herr» Horst-Grünert, declaró muy seriamente a los periodistas que ya no existe una sola, única «nación alemana». Aseguró que ahora hay dos, desde luego. Contestaba así, parece, a Willy Brandt, quien, días antes, había insistido en el hecho de que la duplicidad de «gobiernos», el llamado «federal» y el llamado «socialista», no rompía la «unidad nacional» de los germanos...

De pronto, con esta anécdota de gaceta, resurge de nuevo la pertinaz y confusa polémica acerca del concepto de «nación». Por supuesto, las dos voces en juego son interesadas en un problema concreto, de política inmediata, y cada cual arrima el ascua a su sardina. En todas partes, pero sobre todo en Europa, la palabra «nación» posee efectos mágicos: fascina —y, en consecuencia, sirve para fascinar— a la gente. Los ciudadanos la necesitan para autoidentificarse, para sentir que saben qué son, y la suelen apoyar en datos y en símbolos más o menos convencionales. Es el «patriotismo». Los poderes constituidos aprovechan a fondo esta propensión general, la fomentan, y la supeditan a sus utilidades. En definitiva, los nacionalismos más fuertes son los que emanan de las estructuras jurídico-administrativas establecidas, y, de rechazo, las abonan y las justifican. Si el canciller Brandt invoca la «unidad nacional» alemana por encima o por debajo de los dos Estados rivales, no lo hace porque sí ni por un alegre ejercicio doctrinal: piensa, sin duda, en que la perduración enconada del sentimiento «unitario» de nación favorecerá, a la larga, la reunificación de Alemania, que, naturalmente, los mandamases de la R. F. A. esperan controlar. Por su cuenta, el clan que domina la R. D. A. tampoco se chupa el dedo, y confía en crear entorno a su maquinaria estatal unas adhesiones instintivas: un «patriotismo» propio, insolidario con el vecino y hermano, que ayude a que el censo electoral le conceda un crédito fervoroso, sin recelos, visceral. Lo malo para este último proyecto es que apenas hace cuatro días que los alemanes —reclen salidos del baño ferocemente nacionalista a que les sometió Hitler— se han enterado de que no son «unos», y el sentimiento de «patria» no se improvisa de la noche a la mañana. Willy Brandt, en este punto, lleva las de ganar. De momento, y en este punto: no digo más.

En su conferencia de prensa, Horst-Grünert hizo malabarisismos para explicar a sus oyentes que, de repente, una escisión nacional se ha producido en Alemania, como simple correlato de haberse repartido el territorio entre dos «repúblicas». Es posible que una tentativa similar hubiese logrado un éxito fácil en otras «naciones» europeas: la mayoría de los grandes Estados, y de muchos Estados pequeños, en nuestro Continente, abarcan una vidriosa pluralidad étnica, precisamente inclinada a poner en tela de juicio la definición nacional asertoria del nacionalismo oficial. No era éste el caso, no lo es, de Alemania. Lo que en otros sitios se designa púdicamente con la etiqueta de «variantes regionales» casi no pesa entre los teutones. Alemania tardó mucho en lograr su «unidad nacional» —esto es, a integrarse en un Estado unitario—, pero lo hizo con una eficacia sensacional: además, apenas tropezaba con obstáculos de lenguas y de historias, salvo enclaves aberrantes... La tentativa de la R. D. A., de cara a inventar un «hecho diferencial» resulta problemática. El funcionario remitido a la O.N.U. se ha apresurado a hacer constar que la comunidad de idioma no significa gran cosa —¿no se habla alemán en Austria?—, y que, en cambio, la mera presencia de un Estado socialista «aparte» es suficiente para despertar y coagular el entusiasmo de las multitudes. No digo que no. Pero eso cuesta tiempo. O tendrán que sacarse de anteaer, y la cosa no acaba de ser imaginable en una zona tan repleta de castillos, de sigfridos, de ottones, de goethes, de wagners, de fetiches nacionaloides...

Pero, como ya apunté, lo bueno del asunto es que, en el curso de una controversia tan menuda y agria, nos sitúa ante las raíces la noción misma de «nación». ¿Qué es eso que, de manera tan lúgubre e insidiosa, se viene discutiendo años y años,

aquí y allá, sobre lo que haya de entenderse por «nación», y, en particular, aplicando el esquema a esta o aquella «agrupación humana»? El lío arranca de la Revolución Francesa, en que el tradicional afecto por la autoridad de un rey se sustituye la idea de la «soberanía de la nación». La «nación», para los jacobinos, era el «pueblo», y un pueblo indiscriminado, de maqueta, presuntamente igualitario e igualado. La realidad contradijo tan brillantes esperanzas. El Último Gran Jacobino, Napoleón, acabó de «aplanar» a la Francia de los Capetos, y los Capetos ya habían hecho lo suyo. No tanto los unos y el otro, sin embargo, como para que hoy no coleen bretones, occitanos y demás residuos excitables. Napoleón desencadenó por el resto de Europa, en sus trasiego militares, una considerable cantidad de fermentos reivindicatorios, que, luego, al amparo literario del Romanticismo, adquirieron nueva violencia. El «principio de las nacionalidades» —cada nación debe tener su Estado— alcanzó entonces un gran predicamento, y, tras el conflicto del 14-18, el tratado de Versalles sirvió para desleír relativamente el amasijo del Imperio Austro-Húngaro y otros artefactos vencidos. La cuestión todavía bulle: en el Ulster, en Bélgica, en el Tirolo, en Yugoslavia... Durante este lapso de revueltas, Independencias, invasiones, cárceles, terrorismo y poesía lírica, la «nación», lo que fuera la «nación», era algo que quedaba sumido en una extraña vaguedad teórica.

Don Eugenio d'Ors, muy aficionado al tema —profesó un jovial antinacionalismo hasta 1936—, tuvo una discusión con no sé quién, y en un instante de brío verbal, apostrofó a su contrincante con esta frase certera: «Porque ni Paul Valéry, ni el Papa, ni usted ni yo sabemos lo que es una nación». Insinuaba una evidencia irrefutable: que las definiciones de «nación» son tan diversas como aleatorias, y que cada caso ha sugerido la suya, inaplicable a los casos contiguos o remotos. La nación ha sido siempre «definida» por los nacionalistas. Y cada nacionalismo —con la sartén cogida por el mango o desarmado— ha tratado de dar salida en ello a su propia ansiedad. Los catedráticos de Derecho Político se las han visto negras para reducir a «concepto científico», con destino a sus manuales, todo ese casuismo palpitante. Habitualmente, dichos personajes tampoco estaban limpios de pecado, y lo normal es que fabulasen soluciones sectarias. Cada trinchera arguía a su modo: solitaria. Sólo los nacionalismos estatales coincidían: para ellos, la nación era el Estado, y sanseacabó.

Pero las objeciones se multiplicaron. Mientras el debate fue «interior» —en el interior de la metrópoli—, las barbas universitarias, los discursos de Parlamento y los decretos-leyes zanjaban, o paliaban —al menos—, el barullo. Lo peor fue cuando entraron en liza las colonias. Nunca olvidaré la caricatura de Gandhi que el ingenioso Papini perpetró en «Gog»: cuando el mahatma todavía no era eso, fue a estudiar a Inglaterra, y en Inglaterra aprendió de los ingleses el nacionalismo; vuelto a su India originaria, se dedicó a postular que un «hindú» debería ser un hindú en la misma medida que un inglés era un inglés; lo cual implicaba desalojar del país a los funcionarios de Su Graciosa Majestad, incluyendo a los kiplings. ¿Es la India una «nación»? ¿Lo es Bolivia, Guatemala, San Salvador, Chile? ¿Lo son los árabes en conjunto, o lo son por separado? La multitud de Estados más o menos moranos que emanan de la liquidación —por derribo— del glorioso chanchullo benéfico-explorador de los venerables Imperios europeos?... La nación, tal como «suenan», es un fenómeno encogidamente europeo, y, aplicando el «modelo», no concordaba ni concuerda. Todos los esfuerzos para apañar el asunto, como los de Fanon para Argelia, se resienten de un mimetismo bobo y que da pena. Son cacareos de sorbonistas o de oxfordianos apresuradamente resignados a «querer ser» como los ex amos. A menudo, el nacionalismo insurgente de las colonias, para mayor paradoja, renuncia a rasgos que en la Europa matriz son tenidos como esenciales: las lenguas, por ejemplo. Frente a la España de Fernando VII, los rebeldes americanos no se acogían al idioma precolombino, porque los «próceres», y hasta Pancho Villa, se querían cervantinos o moratinianos. La «francophonie» de una cierta «négritude» implanta a

Racine y a Pascal en la selva virgen. Etcétera. Cuando los nacionalismos rebeldes del Viejo Continente desenterraban sus dialectos más oscuros, algunos nunca ascendidos al rango de caligrafía, las conformidades de África, América y Oceanía cumplaban el examen. Y en ello estamos, por supuesto.

¿Y desde la açera de enfrente? Me refiero a la marxista ortodoxa. Marx y Engels han sido recusados, por críticos y exégetas, como sospechosos de nacionalismo alemán. Indudablemente, los papeles de estos señores relacionados con las fricciones nacionalistas de su época toman un inequívoco tinte germanoide. Al pasar la antorcha a manos de Lenin, el internacionalismo proletario empezó a ser lo que le correspondía ser: Lenin, heredero de los zares, tuvo que enfrentarse con el mosaico abigarrado de pueblos y lenguas intercalados en la esfera de su autoridad. No podía ser un nacionalista alemán, claro está, e hizo todo lo posible por no ser un nacionalista ruso: entre el «Manifesto» y Octubre hay esta diferencia, notabilísima. Stalin, luego, se lanzó a la aventura de dogmatizar, y no lo hizo demasiado bien. Por una simple y elemental falta de imaginación. Ahora bien: la línea marxista es coherente, y desemboca en un enunciado terriblemente cínico, o sea, descriptivo: la «nación» es un «mercado». Hablar una lengua es una cosa, tener sobre las espaldas —con alegría o no— una historia, sentirse uno como «uno mismo» a escala ciudadana, repito, es una cosa, y otra, muy distinta el circuito de negocios y de burócratas en que nos encontramos involucrados. Alguien, no puedo precisar si Marx, Engels, Lenin o Stalin, puso en circulación el topónimo «mercado nacional». Porque topónimo es. Un «mercado» supone eliminación de aduanas, coordinación de transportes, transfusión de dinero y, por descontado, un edificio de poder adecuado, y la labia superestructural «patriotarda». Muchos adultos de Argelia, en este momento, todavía, por muy alcoránicos y de tez oscura que fuesen, se conmueven ante versos de Verlaine y ante el mito de Juana de Arco. La escuela les hizo, o quiso hacerles, franceses: pertenecían al «mercado nacional» francés. ¿La nación es eso?

Stalin pasó al otro mundo antes de que la espabilada tribu neocapitalista —el Neocapitalismo no entraba en sus cálculos— montase el Mercado Común Europeo. Los «mercados nacionales» no llegaron a perfeccionarse: la historia no es tan dúctil a la fantasía de los doctrinarios. El «mercado continental», hoy por hoy, toma consistencia. Los «partidos comunistas occidentales» sufren esta perplejidad, que no tiene razón de ser: se empeñan en boicotear el Mercado Común, cuando están obligados a aceptar su eminente vigencia «real». Les obliga a dejar de ser nacionalistas. Porque ahora el «mercado» es otro. Y sin Juana de Arco que cosquilleen los nervios poéticos —y, ¡ay!, patrióticos— de Louis Aragon...

Horst-Grünert cavila a su modo, y piensa que, con unas fronteras —un «muro»—, los alemanes de su jurisdicción llegarán a sentirse nacionalmente diferentes de los alemanes de Willy Brandt. Dando tiempo al tiempo, ¿por qué no? Los austriacos no son verdaderos alemanes, como Hitler deseó, porque, a pesar de compartir el idioma y otros ingredientes más profundos de una hipotética sociedad común, les segregaba su «mercado»: su monarquía distinta, sus impuestos privativos, sus colegios de pago, sus escritores elocuentes... ¿Habrá en el futuro una parcela de «nación alemana» que será «nación diferente» por el simple hecho de que manden los socialistas?... Este es el intríngulis. Y yo me inclinaría a responder que sí. Que la amarga amenaza va por ahí. «Cuius regio, eius religio.» La R. D. A. será, a la larga, una Austria sin vaises, y el canciller Brandt, si Dios no pone remedio, se aguantará. Pero la Europa comunitaria, con sus reinos y sus repúblicas reticentes, poliglota y policaca; aberrante e intra-imperialista, ¿no será la próxima «nación» eficiente? A expensas de las naciones precedentes, de los «mercados nacionales» sonoros, por descontado...

José María DE AREILZA